

I

Desde la perspectiva de la protección de datos personales, que es lo que incumbe a esta AEPD, cabe hacer mención en relación con este Anteproyecto a dos cuestiones, la primera de carácter general y la segunda específica.

Con carácter general, el Anteproyecto sometido a informe tiene por finalidad principal, según resulta tanto de la Exposición de Motivos como de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) aportada, *reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria como una manifestación específica y extrema de la violencia de género, en la cual el agresor utiliza a los hijos e hijas de la víctima de violencia de género como instrumentos para causarle un daño psicológico profundo. Con ello se pretende visibilizar este tipo de violencia de género y lograr un mayor reconocimiento de sus implicaciones y de la necesidad de abordarla desde una perspectiva integral y especializada.*

Por ello, el prelegislador expone que *[d]e todo lo expuesto se desprende que es urgente impulsar y fortalecer las medidas necesarias para garantizar una respuesta adecuada y efectiva frente a la violencia vicaria, tanto desde el ámbito penal como a través de un enfoque integral centrado en la prevención, la atención inmediata, la protección efectiva y la no revictimización de las víctimas.*

Para ello, se plantean modificaciones de diversos textos legales que ya contenían una regulación de la materia, que ahora se vienen dichas normas a complementar, mediante la inclusión en esas normas de otras personas en el concepto de víctimas de la violencia vicaria, la tipificación de la violencia vicaria como delito, o articular medidas de prevención, formación y atención especializada a las víctimas de esa violencia.

Las normas que se modifican, a los efectos de que ahora interesan, son el Código civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a la necesidad de escuchar a los menores o a los mayores con discapacidad necesitados de especial protección, en el seno de un proceso de medidas, patria potestad etc. Se modifica también el Código Penal para la tipificación del delito de violencia vicaria como un delito contra la integridad moral. Asimismo, se modifica la Ley

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incluir como indicador de riesgo la exposición de la persona menor de edad a una situación de violencia vicaria. Y por último también la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En definitiva, en todas estas normas, ya preexistentes, existía la necesidad de tratar los datos de las víctimas de violencia de género, -incluyendo en esta a la violencia vicaria-, para cumplir con las distintas finalidades que dichas leyes persiguen. Esos tratamientos de datos personales se registrarán por las distintas normas que ahora se modifican y se completan.

Ahora bien, y sin perjuicio de que esta Agencia considera muy favorablemente que el prelegislador haya incluido en la MAIN, en su apartado 9, una referencia al impacto en la protección de datos de la nueva norma proyectada, también considera que hubiera sido conveniente que su contenido no se limitara a exponer las conclusiones de la Evaluación de Impacto en la protección de datos (EIPD), sino que para su comprensión hubiera incluido también el análisis de los riesgos que esta nueva regulación en el anteproyecto añade a los datos personales por los tratamientos de datos que se derivan de las normas que se modifican. Esto es, cuáles son los riesgos adicionales por el hecho de añadir nuevos datos a tratar por las autoridades públicas de nuevas personas como víctimas de violencia vicaria (descendientes -no sólo hijos o hijas-, ascendientes etc.). El apartado 9 menciona que se ha llevado a cabo una Evaluación de Impacto en la protección de datos (EIPD) pero no cuáles son los *nuevos* riesgos que se derivan del análisis de riesgos que se ha debido de llevar a cabo para obtener la necesidad de llevar a cabo la EIPD mencionada (ver art. 32 y 35 RGPD).

En cuanto a la normativa que habrá de regir los tratamientos de datos personales que se derivan de cada ley modificada, será esta ley la que determine cuál será dicha regulación, atendiendo a la finalidad de dichos tratamientos. Esto es, no siempre será el RGPD la norma que los regule, sino que específicamente hay tratamientos de datos cuya finalidad por parte de las autoridades competentes será la *prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública*, en cuyo caso se registrarán por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, y no por el RGPD. Sin embargo, si esos mismos datos se tratasen con fines, por ejemplo, de asistencia social, la ley orgánica 7/2021 no sería aplicable, sino que las normas a aplicar serían el RGPD y la LOPDGDD.

II

Como cuestión específica que habíamos mencionado al principio, el art. Sexto, apartado tres, del anteproyecto, modifica la Ley Orgánica 1/2004, en su art. 29, para incluir en su apartado 2 la mención a que *la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género llevará a cabo la operación estadística denominada “Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género”, conforme a lo establecido en el Plan Estadístico Nacional y en los correspondientes programas anuales que lo desarrollen.*

A este respecto, parece conveniente mencionar que el art. 25.1 de la LOPDGDD señala que *el tratamiento de datos personales llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.*

Y esa legislación específica es la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que contiene el concepto de secreto estadístico, a que habrá de atenerse la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el ejercicio de dicha función estadística, conforme establecen los arts. 4.7 y 13 de la citada ley 12/1989. Hay que recordar, a este respecto, que el concepto de *dato personal* ha sido interpretado con carácter amplio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que esos datos de las víctimas mortales son datos confidenciales si permiten identificar a las unidades estadísticas, y serían en todo caso datos personales si permiten identificar a personas físicas, como pueden ser los familiares (es decir, también víctimas de violencia vicaria) de la persona fallecida.

En conclusión, en este apartado 2 del art. 29 esta Agencia sugeriría, con carácter meramente aclaratorio, que se añada que, conforme al art. 25 de la LOPDGDD, los tratamientos de datos necesarios para el ejercicio de esa función estadística se registrarán por la ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública, así como por lo dispuesto en el [Reglamento \(UE\) 2016/679](#) y en la LOPDGDD.

Por último, ya el Real Decreto 1225/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, recoge como Operación estadística 9798 la Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género, en la que ya aparece la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género - Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia contra las Mujeres, como organismo responsable.